

¿Hacia una liturgia de la reconciliación?

Por Hugo Mery

Fuente: Radio Universidad de Chile. 09 diciembre de 2004

Un afán extremo de contemporización de algunos civiles con los militares llevó a un extraño cruce de la autocrítica histórica de la izquierda con una inédita inobservancia por parte de ésta de los Derechos Humanos.

El acto por los Derechos Humanos realizado por el Ejército el martes 7 tuvo mucho de una liturgia cívico-militar, que buscaba la reconciliación entre víctimas y victimarios del régimen instaurado en 1973.

Para concretarlo, se acudió a un sutil aunamiento de voluntades en la que el convocante puso lo menos. Ya el hecho mismo que la principal institución armada organizase el acto era un paso que llamaba al reconocimiento de los invitados.

El anfitrión recibió solemnemente loas por esta culminación de la conducta que asumió desde que se sentó en la Mesa de Diálogo. Después de reconocer que se lanzaron detenidos políticos al mar, el mando encabezado por el general Cheyre ha emitido, en una graduada subida de peldaños, una serie de pronunciamientos cuyas culminaciones fueron el sonoro "Nunca más" del año pasado y la asunción de la culpa institucional de hace un mes.

Ahora el jefe del Ejército ha llamado a los poderes políticos y a la civilidad convocada a que no lo dejen solo en esta tarea y, como muestra suplementaria de voluntad, pidió –por última vez, dijo Cheyre- a sus hombres que digan lo que saben sobre el destino de los detenidos desaparecidos y de los restos de los ejecutados.

Los representantes civiles que subieron al podio durante las cinco horas de exposiciones en la Escuela Militar se sintieron tocados por la emoción que les producía el solo hecho que ellos estuviesen convocados allí, en el alma mater o'higiniana, y se fundieron en un coro con los uniformados.

Así el presidente del Senado, el UDI Hernán Larraín, repitió que todos somos culpables por lo sucedido; el abogado de Derechos Humanos José Zalaquett agregó la clemencia como uno de los elementos de la justicia, y el senador socialista Ricardo Núñez cruzó extrañamente la crítica histórica de su partido por lo sucedido durante la Unidad Popular con una inobservancia de los Derechos Humanos por parte de la izquierda en el período previo al golpe militar.

No es que el dirigente del PS haya reconocido muertes ni torturas por parte del gobierno de Salvador Allende, sino una falta de sintonía con las reales condiciones políticas imperantes, lo que llevó a la UP a perseverar en un proyecto que no interpretaba a la mayoría nacional.

Que los factores en juego hicieron inevitable el golpe de Estado es una cosa, pero el salvajismo desatado después de aquél es otra.

La confusión de elementos así expuestos, si no reveló falta de inteligencia, por lo menos mostró un afán extremo de contemporización, que no toma en cuenta que el victimario de ayer no ha cumplido con todos los requisitos para el logro de una verdadera reconciliación.

A saber, el Ejército no ha pedido perdón y la Armada, Aviación y Carabineros han sido cuidadosos en no reconocer responsabilidad institucional, y el Ejército mismo la ha acotado a

un nivel ético, en el que fallaron los mandos, sin precisar que se trató del alto mando ni menos del comandante en jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte.

No reconoce tampoco el Ejército que se aplicó contra el enemigo interno la doctrina de Seguridad Nacional, dictada por uno de los polos de la Guerra Fría e implementada en la Escuela de las Américas de Panamá y las otras academias controladas por el Pentágono. A ellas el Estado chileno enviaba a sus militares de selección a aprender no sólo estrategia y tácticas operativas, sino también métodos de aniquilamiento y tortura.

La doctrina se conformó antes que sectores de la izquierda chilena proclamasen como válidas todas las formas de lucha –la armada incluida- contra “el dominio de la burguesía y el imperialismo”.

Y, finalmente, cuando Cheyre llamó el martes a la entrega de información pendiente fue, en último término, para terminar con la acusación de secuestro permanente que pesa sobre algunos condenados -a los que no se va a abandonar, dijo-, de modo que se determine la muerte de los detenidos y sus autores puedan salir en libertad, si encajan en la amnistía que cubre hasta 1978. Llamó la atención que el liberal Andrés Allamand sostuviera que el peso de la prueba, en estos casos, no debe recaer en los inculpados, sino en el Estado.

Lo avanzado hasta el acto del martes en la Escuela Militar es hartó y significativo y puede ser un aliciente para que los poderes y los civiles que cohonestaron los atropellos avancen tanto como ha querido avanzar el Ejército. Pero a éste y a las otras fuerzas armadas les falta todavía para que obtengan un reconocimiento mayor de la civilidad victimizada y del conjunto del cuerpo social, que ha internalizado los tres Informes que van de 1991 hasta ahora.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: <http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

